

# Educación, la asignatura pendiente

JOSÉ A. FUNES ARJONA

PRESIDENTE DE LA 'PLATAFORMA POR LA HOMOLOGACIÓN' DE GRANADA.

**H**emos considerado preciso el título del libro de Victoria Camps, escrito hace algunos años, para radiografiar la educación española, y –específicamente– la andaluza. Desde hace demasiados años nuestro sistema educativo adolece de vicios que, lejos de superarse aumentan. Son tantos, que cuesta hacer una foto del momento actual que vivimos, si no partimos de unos objetivos claros. En la educación ocurre como en el fútbol: todos creemos ser especialistas y tener las pautas oportunas para arreglar el desajuste; todos (ah, ¡perdón! y todas) creemos saber dónde radica el problema y dónde encontrar la solución; todos señalamos a los responsables y, por supuesto, nos desvinculamos del desastre, olvidando la afortunada frase de Marina que señala la competencia de la 'tribu' en el quehacer educativo.

Obviamente, con una mirada en perspectiva, los logros son patentes: derecho universal, medios humanos y tecnológicos suficientes, instalaciones adecuadas, planes e intervenciones múltiples, etc. Negar este avance sería injusto. Jamás hemos contado con mayores posibilidades, pero también difícil es encontrar un tiempo en que se haya instalado con tanta fuerza la crítica a nuestra educación, tan solo camuflada en los momentos actuales por los ataques, ajustes y recortes recibidos desde las Administraciones públicas. Ejemplo de este descontento son las leyes generales que se presentan y eliminan con la misma temporalidad que se establecen los gobiernos. Nacen con fecha de caducidad. Por ello tengo la impresión que hay temas que no se quieren arreglar y la educación es uno de ellos, el 'gallón pelón', que una y otra vez nos contaban de niños sin encontrar jamás final. Decir que los políticos no quieren es simplificar el asunto, porque en una sociedad democrática, como le gusta decir a Savater, políticos somos todos. Etiquetarla como cuestión ideológica es una perogrullada, pues todo es 'política' en nuestras sociedades complejas: hablar y callar, decir A o B, sonreír y llorar, escoger y prescindir, valorar y despreciar. El cacareado pacto educativo es propuesto año tras año y, a la vista está, nadie quiere: no quieren los políticos porque son incapaces de alcanzar un acuerdo de mínimos y se les restaría un asunto que tanto juego da en campaña, no lo desean los sindicatos porque desaparecería parte de su modus operandi actual si no hay alguien a quien enfrentarse, no lo persiguen las Asociaciones de Padres

y Madres porque deberían fusionarse, no lo busca la sociedad en su conjunto porque en el fondo el interés por la educación es meramente propagandístico. Por eso da igual la ratio, las competencias que se logren, la profesionalidad, el nivel alcanzado, la disciplina, el rigor académico, etc. Todo se soluciona con encuestas de agencias evaluadoras, de escaso rigor algunas de ellas, y con la invención de planes de calidad que encierran la educación en gráficas de coste/beneficio como si educar alumnos fuese lo mismo que vender bolígrafos, aunque los bolígrafos cada vez estén más alejados de las aulas. Los problemas educativos los soluciona la Administración a golpe de decretos, con lo que sólo los enmascara.

A este patio, donde las comunidades con transferencias desarrollan un porcentaje significativo del currículum, viene a sumarse la artificial polémica, esta sí alimentada con primor, de enseñanza pública vs enseñanza concertada. Apelar a la Cons-

titución para salvaguardar los derechos individuales debiera dejar zanjando el tema. No es así. Las comunidades han legislado con el horizonte de las leyes educativas para ir compatibilizando las dos redes. Pero las diferencias latentes se visualizan en períodos significativos como los electorales o tiempos de crisis como los actuales. En Andalucía la LEA parecía atender a una reivindicación histórica de algunos sectores: el reconocimiento de la enseñanza concertada como 'servicio público'. Dicho así quedaría resuelta la antinomia. Los hechos han demostrado que las palabras son en demasiadas ocasiones conceptos vacíos ajenos a la lógica. La prosa legal se convierte frecuentemente en poesía y los artículos en metáforas sujetas a libre interpretación. De otra forma no se entiende que haya sindicatos que sólo convoquen movilizaciones en la enseñanza 'pública' negando tal consideración legal a la concertada o, desde la vertiente opuesta, convoquen a la concertada en solitario cuando los problemas son comunes y las soluciones debieran serlo también. No sólo sindicatos, porque este discurso dual lo mantienen también las formaciones políticas y las asociaciones de padres. Además, nadie duda en seguir consignas en función del arco ideológico desde el que se difunden. Eso sí, unos y otros tachan la postura contraria como 'politizada' y hace descansar la suya sobre el sentido común, aunque curiosamente este sentido pertenezca ¡qué casualidad! a otra acera ideológica.

Ese es el primer debate que necesitamos superar. Para ello los partidos, representantes de la voluntad popular, debieran establecer por Ley la obligatoriedad de un pacto como si de pensiones se tratara. La educación no puede estar sujeta a vaivenes políticos porque así es imposible avanzar. En Finlandia, ejemplo reiterado por sus buenos resultados, la educación no se toca desde hace al menos cincuenta años. No ha hecho falta ni pacto, porque los políticos simplemente no han polemizado sobre el particular y, tras establecer unas bases sólidas, han de-

jado que la escuela siga su curso. En Finlandia un profesor tiene la misma consideración que un médico o un juez en España. Hoy es impensable lograr de la noche a la mañana una nueva mirada sobre la Educación en nuestro país, pero si no sentamos bases sólidas: formación de los docentes, normativa rigurosa que valore el trabajo y se aleje del 'buenismo' instalado con la LOGSE, estabilidad en los planes de estudio, evaluaciones externas serias,

etc. no construiremos una educación de calidad, educación en la que estamos implicados los centros concertados, pues están financiados con dinero público, y los centros de titularidad pública.

Si en otros lugares la educación ha evitado debates estériles, aquí también podemos lograrlo. Es cierto que la red dual española es singular, pero caben alternativas que permitan acercar posturas sin un rechazo visceral. Educar es algo tan importante que debiera obligarnos a mirar con generosidad. Desde los centros públicos es preciso abandonar el tópico de considerar lo privado como el enemigo y los centros concertados deben hacer un esfuerzo de transparencia (justificación de fondos, contratación del profesorado...) para caminar mano con mano en la hermosa tarea de educar. Al margen de tópicos, estamos formando los ciudadanos del futuro. Ojalá seamos capaces de merecer un aplauso largo de aquellos a quienes ahora dedicamos nuestro tiempo y nuestras energías.



IBARROLA